

Las concesionarias cifran en 450 millones la supresión de peajes

Los transportistas celebran que Fomento asuma autovías cuyas concesiones venzan

EL PAÍS, Madrid

La patronal de las concesionarias de autopistas Seopan eludió ayer posicionarse sobre la decisión del Gobierno de eliminar los peajes de las autopistas cuyas concesiones vayan venciendo, aunque se remitió a una valoración reciente que estima que el coste para el

Estado será de unos 450 millones de euros al año, entre el mantenimiento y lo que dejará de ingresar por la concesión y por los impuestos, entre ellos el IVA que paga cada conductor. Por su parte, los transportistas celebraron el anuncio, en una entrevista en EL PAÍS, del ministro de Fomento, Jo-

sé Luis Ábalos. Lo mismo hizo Podemos, mientras Ciudadanos pidió al Gobierno que aclare su modelo de infraestructuras.

Según Seopan, la liberación de peajes al revertir las autopistas de pago a la red pública tendría un coste de unos 450 millones de euros anuales, y eso solo en lo que se refiere a las concesiones que vencen entre este año y 2021: seis tramos, entre ellos la AP-1 Burgos-Armiñón, la AP-4 Sevilla-Cádiz y la AP-7 entre Alicante y Tarragona, que concluyen entre este año y el que viene. Si se incluye toda la red de pago, de 2.550 kilómetros, el coste se iría a 1.000 millones.

Por su parte, el sector del transporte por carretera sí celebró el levantamiento de barreras en las carreteras. Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, que agrupa a 32.000 peque-

Reivindicación andaluza y valenciana

El consejero andaluz de Fomento, Felipe López, recibió ayer “muy positivamente” la decisión de Fomento de quitar el peaje de la AP-4 entr Sevilla y Cádiz, tras las promesas incumplidas de Zapatero y Rajoy. La gratuidad del tramo Alicante-Tarragona era también una de las principales reivindicaciones del Gobierno valenciano, formado por el PSPV-PSOE y Compromís, con el apoyo de Podemos. Por su parte, el Gobierno vasco defendió que pague el usuario de la vía.

ñas y medianas empresas de transporte, resaltó que cada uno de los cerca de 240.000 camiones de transporte público (por diferenciarlos de las flotas de camiones de empresas que transportan mercancías propias, otros cerca de 90.000) que circulan por España paga anualmente unos 1.900 euros en peajes. Además, subrayó la descongestión de las vías secundarias que traerá la medida.

Por su parte, José Manuel Pardo, director técnico de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), que representa a unas 200 empresas con 20.000 camiones señaló que, a falta de conocer la letra pequeña, les parece “justo”, una vez amortizada la construcción de una autopista, dejar de cobrar unos peajes que se establecen precisamente para esa amortización.

Nuevo avance para excluir a la carretera de la Directiva de Desplazamiento

XXXI. Madrid

La Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, con una ajustada votación de 27 contra 21, ha aprobado excluir al transporte internacional por carretera y el tránsito a través de países de la UE del ámbito de aplicación de la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores.

El acuerdo, que no es definitivo, ha sido acogido con satisfacción por la patronal Astic (Asociación del Transporte Internacional por Carretera), que ha promovido en Bruselas, junto a casi una treintena de organizaciones europeas del sector, la postura de que "los conductores de larga distancia no son trabajadores desplazados".

La organización que preside Marcos Basante recuerda, a través de un comunicado, que "esta normativa está pensada para otros sectores" y advierte que "la aplicación práctica de la directiva ha demostrado ya que genera una gran carga burocrática y un enorme caos normativo". Y es que el sector trata en Europa con hasta 20 legislaciones nacionales diferentes y hasta 50 niveles de salario mínimo, lo que supone una "repercusión especialmente negativa en las empresas de transporte que tienen alcance paneuropeo y trabajan con clientes de múltiples nacionalidades", añade la nota. El director general de Astic, Ramón Valdivia, puso el acento en que se trata de "un primer paso para que en Bruselas se comprenda la especial situación del sector".